



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Álvaro Antonio Arango Arango
DEMANDADO	Colpensiones y Protección S.A.
RADICADO	05 001 31 05 014 2022 00164 01
TEMA	Ineficacia de traslado de régimen
DECISIÓN	Adiciona y confirma sentencia

Medellín, veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anunciada, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de consulta. La sala, previa deliberación, adopta el proyecto presentado por el magistrado ponente, que se traduce en la siguiente sentencia.

Pretensiones

Álvaro Antonio Arango Arango llamó a juicio a las demandadas con el fin de que se declarara la ineficacia del traslado que realizó al Régimen de Ahorro Individual, y como consecuencia se condenara a Protección S.A. a devolver a Colpensiones sus cotizaciones con los correspondientes rendimientos. Además, que se ordenara a la administradora del RPM que lo admitiera como afiliado y cotizante, así como que recibiera las cotizaciones con sus respectivos rendimientos.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indicó que nació el 17 de mayo de 1960; que al inicio de su vida laboral se afilió en pensiones al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones; que el 27 de enero de 1995 se trasladó a Protección S.A., como administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sin que para ese momento se le hubiera brindado la

información necesaria, debido a que solo le fue señalado que el ISS se iba a acabar, sin mencionarse la forma para acceder a la pensión anticipada y que la pensión varía de acuerdo con los rendimientos de sus aportes.

Agregó que el 11 de marzo de 2022 solicitó a Colpensiones que aceptara el traslado de régimen para retornar al que esta administra, petición que fue negada, debido a que se encontraba a menos de diez años para pensionarse.

Contestaciones

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) se opuso a todas las pretensiones de la demanda y aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento del demandante, la afiliación al ISS, y la reclamación presentada ante la entidad.

Propuso las excepciones de mérito que denominó: *«carga dinámica de la prueba – particularidades del caso»*; inoponibilidad por ser tercero de buena fe; improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia de la obligación; improcedencia de intereses moratorios; improcedencia de la indexación de las condenas; prescripción; devolución de cuotas o gastos de administración, seguros previsionales, rendimientos y ahorros voluntarios debidamente indexados; buena fe de Colpensiones; e improcedencia de condena en costas.

De otro lado, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A., también se resistió a lo peticionado y tuvo como ciertos los supuestos relacionados con la data de nacimiento del actor y el traslado de régimen.

Finalmente, como medios exceptivos planteó la inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción; falta de juramento estimatorio de perjuicios como requisito procesal; aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones; *«reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa»*, *«inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la*

nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe», y la innominada o genérica.

Sentencia de primera instancia

El 17 de mayo de 2023 el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín *declaró* la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS administrado por Protección S.A. *Condenó* a está a trasladar a Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, el valor de los dineros de la cuenta de ahorro individual, con las cotizaciones, cuotas de administración que incluye los dineros correspondientes a la garantía de pensión mínima y seguro previsional, causados desde el 1º de febrero de 1995.

Ordenó a Colpensiones a activar la afiliación del actor al RPM sin solución de continuidad e incluir en la historia laboral todas las cotizaciones sufragadas en el fondo del RAIS. También dispuso que Protección comunique el contenido de la decisión a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Oficina de Bonos Pensionales para los efectos legales correspondientes. Finalmente, tuvo por probadas las excepciones de mérito propuestas e impuso las costas procesales exclusivamente respecto de la AFP del RAIS.

Para tomar la decisión, encontró que Protección S.A. no demostró que era falso lo afirmado por el demandante, es decir, que debió acreditar que otorgó una verdadera asesoría que permitiera al interesado ponderar los riesgos frente a la construcción de una mesada pensional futura. Ello en atención a la inversión de la carga de la prueba.

Apelación

Colpensiones presentó recurso de apelación parcial, pues no comparte la condena respecto de los gastos de administración, los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, la cuota de seguro previsional y, en general, todas las sumas descontadas al afiliado, en tanto que las devoluciones deben ser debidamente indexadas. Se apoyó para ello en decisiones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Alegatos

Surtido el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES

No fue objeto de controversia que el demandante se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) al de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), por medio de la Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Protección SA (ver formulario en el archivo 12, página 26).

Así las cosas, el Tribunal debe definir si es ineficaz el traslado de régimen pensional de Álvaro Antonio Arango Arango a Protección S.A. y, consecuentemente, en caso de proceder la declaratoria de la ineficacia, se deberán analizar los conceptos a devolver por los fondos privados, si procede la indexación y la operancia de la excepción de prescripción. Ello con ocasión al recurso de apelación presentado por Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de esta entidad, como lo dispone el artículo 69 del CPTSS.

Acto jurídico de afiliación y precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional

Para comenzar, la Sala hará un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que estructura el tema.

Inicialmente advirtió la referida Corporación que i) el traslado de régimen debe estar precedido de toda la información relevante para la toma de la decisión; ii) es necesario que el fondo de pensiones proporcione a quien pretenda captar como su afiliado, una información suficiente, completa y clara sobre las reales implicaciones que conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras; iii) la figura de la ineficacia es una consecuencia prevista en el literal b del artículo 13 de la ley 100 de 1993 para aquellos casos en que el fondo de pensiones omitió suministrar

información que permitiera la selección de régimen de forma libre y voluntaria, acto indebido de esta que tiene como consecuencia no producir sus efectos propios; y, iv) el Estatuto Financiero de la época, en los artículos 97 y siguientes, consagró que las administradoras debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe, por lo que se sanciona la falta de información relevante.

Más adelante, precisó que i) es deber de las administradoras de pensiones brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; ii) la información debe ser completa y comprensible y debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica; y, iii) la carga de la prueba de demostrar que se informó de forma detallada, clara y documentada recae en la administradora de fondos de pensiones.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia fijó unos grados de exigencia de la información, según las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, así: i) desde la fundación de las AFP; ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 incorporado en el Decreto 2555 de 2010; y, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014, del Decreto 2071 de 2015. y en la circular 16 de 2016, la cual entrega instrucciones generales para la remisión de información financiera para efectos de inspección, vigilancia y control.

La determinación por tomar tiene como soporte las sentencias CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, CSJ SL 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, CSJ SL12136-2014, CSJ SL9519-2015, CSJ SL19447-2017, CSJ SL17595-2017, CSJ SL3496-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL4360-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ STL3716-2020, CSJ STL4001-2020, CSJ STL4084-2020, CSJ SL2611-2020, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020, CSJ SL1217-2021, CSJ SL782-2021 y CSJ SL445-2022.

Ahora, sobre la carga de la prueba es importante recordar la sentencia CSJ SL4426-2019, en la cual la Corte expuso los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara

y transparente, lo que se explica desde la premisa de que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia; además, la AFP está en una mejor posición de ilustrar, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado y, como entidad especializada, cuenta con los conocimientos para que a través de sus asesores haga conocer a los afiliados que pretende captar, los pormenores de sus situaciones pensionales y las consecuencias que trae elegir el régimen ofrecido.

De este modo se concluye que las afirmaciones realizadas por el demandante no fueron desvirtuadas procesalmente por Protección S.A., pues si bien aportó el formulario de traslado a dicha entidad (archivo 12, página 26), en el cual se hizo constar que la escogencia del régimen de ahorro individual se efectuó de forma *“libre, espontánea y sin presiones”*, tal documento no es prueba suficiente para determinar que efectivamente se brindó una asesoría completa acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro.

Debe repetirse que la labor de los asesores de los fondos privados, en la etapa pre-negocial -anterior a la materialización del consentimiento- consistía en brindar una información transparente, completa, detallada y comprensible, puesto que lo que se revisa es si la administradora de fondos de pensiones, que pretendía captar un afiliado, cumplió con los imperativos profesionales de información.

En el caso objeto de estudio, tampoco se advierte confesión del actor, pues en el interrogatorio de parte refirió que a la empresa los visitó un asesor de Protección S.A., donde les manifestó que el ISS se iba a acabar y que se quedarían sin pensión. También les indicó que, trasladándose al fondo privado, podrían pensionarse de manera anticipada, que los beneficiarios heredarían la pensión, que el formulario fue diligenciado por la asesora y que solo lo firmó. Que cuando se acercó a Protección cerca de cumplir la edad de pensionarse, cuando le fue realizada la proyección, se percató que lo prometido en un principio no se asimilaba con su expectativa pensional.

De igual manera, es importante advertir que, si bien la mayoría de los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a

afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esta circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado.

No puede pasarse por alto que la ineficacia es una respuesta jurídica a la transgresión de un deber legal y ello implica que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica y, por tanto, no produzca efectos. Al efecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, indicó que *«la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado»*. Por tal razón no es procedente analizar el caso de autos bajo lo dispuesto en el artículo 2.º de la ley 797 de 2003 el cual modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993, en lo que respecta al traslado de régimen cuando a un afiliado le faltan 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

Como ya se mencionó, el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo (sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL4426-2019). En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS se hizo efectivo el 1.º de febrero de 1995 (ver archivo 12, página 40) lo que se corresponde con el primer momento, por lo que según lo expresado en la sentencia CSJ SL-1452-2019, la obligación de la administradora privada era la de brindar una información necesaria y transparente.

Sobre dichas obligaciones de las administradoras de pensiones, es bastante categórica la sentencia CSJ SL-782 de 2021, en la cual la Corte Suprema de Justicia indicó que se debe declarar la ineficacia cuando quiera que: *«...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos*

positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional».

Asimismo, es pertinente acotar que aun cuando al actor se le brindó reasesoría en el año 2012 (ver archivo 12, página 31), en el asunto lo que se busca es establecer el cumplimiento del deber de información que aquel recibió en el traslado primigenio, esto es, el 1.º de febrero de 1995. Al respecto, la citada Sala de Casación Laboral, en sentencia CSJ SL 1564-2022, explicó: *«una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas, no hayan expresado inconformidad alguna con el sistema habiendo permanecido en el mismo, realicen aportes voluntarios o sean re asesorados, como aconteció en el presente asunto lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021»* (subrayas fuera del texto).

Se tiene entonces que Protección S.A. no cumplió con la carga de probar el haber realizado una asesoría lo suficientemente clara, detallada y concreta en relación con la situación particular, en la etapa previa a la suscripción del formulario de afiliación; por tanto, debe concluirse que es desde allí que el traslado resulta ineficaz, lo que genera como consecuencia que la afiliación válida es la efectuada al régimen de prima media, por lo que se debe *confirmar* la providencia de primera instancia en tal sentido.

Efectos de la ineficacia y conceptos a devolver por los fondos privados

Ahora, con relación a los valores a devolver por el fondo privado, la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que, al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional. Lo anterior implica que la AFP que dio lugar a ello, siempre y cuando se hayan generado las debidas cotizaciones, traslade a Colpensiones: (i) la totalidad del capital ahorrado, (ii) los rendimientos financieros obtenidos y (iii) los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del

acto ineficaz, estos recursos debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.

De igual forma, no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, pues debe garantizarse que Colpensiones reciba una suma equivalente a la que correspondería con rendimientos financieros, en caso de que no se hubiera surtido el traslado. Además, es claro que en la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputaron a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima sumas que, como se dijo, no pueden ser inferiores al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la persona hubiere permanecido bajo la administración de Colpensiones.

Además, la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL-3464 de 2019, señaló que *«La Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones»*.

Así pues, es necesario dejar claros algunos aspectos en lo referente a los conceptos que deben ser devueltos por las AFP del RAIS cuando se declara la ineficacia. En este sentido la Sala, a partir del precedente jurisprudencial, ha identificado los siguientes conceptos:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM¹.

¹Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador².
3. **Gastos de administración**³, concepto consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros del Fogafin y los pagos correspondientes a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos rubros por parte de las administradoras del RAIS a COLPENSIONES, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios⁴, (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones⁵.

Finalmente, se recuerda la necesidad que estos conceptos sean asumidos por la administradora con cargo a su propio patrimonio **y se entreguen debidamente indexados**⁶, a efectos de que el dinero no pierda su capacidad adquisitiva, sin que ello resulte incompatible con la devolución de los rendimientos restituidos, de conformidad con el artículo 1746 del Código Civil.

²Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

³Se debe realizar la devolución de estos conceptos indexados conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL-3871-2021, CSJ SL-4062-2021 y CSJ 4063-2021.

⁴Sentencia CSJ SL-4360-2019.

⁵Sentencia CSJ SL-2877-2020.

⁶En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

4. **Aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016⁷.

Ahora, con relación a los conceptos que deben ser entregados desde el RAIS hacia el RPM, resulta importante efectuar una precisión por parte del ponente, en el sentido de clarificar que, a partir de un nuevo estudio del tema, que incluye una lectura detallada de la posición que ha sostenido de manera reiterada la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, debe incluirse las sumas dirigidas a cancelar las primas de seguros previsionales.

Lo anterior encuentra como sustento que se trata de recursos que integraban la cotización realizada al sistema pensional, por tanto, de cara a los efectos de la declaratoria de la ineficacia de la afiliación, cual es que el acto jurídico no produjo efectos, no es posible escindir los conceptos sufragados, y entender que parte de los gastos de administración deben ser entregados a Colpensiones y otros no, aun cuando tienen el mismo origen, más aún cuando es la AFP del RAIS quien originó o permitió que tales consecuencias se produjeran.

Por lo anterior, es necesario *adicionar* la sentencia para *ordenar* a Protección S.A. que, además de lo ordenado por el juez, teniendo como base la sostenibilidad financiera del sistema y que la presente sentencia se revisa en grado jurisdiccional de consulta, devuelva lo correspondiente a la prima de reaseguro de Fogafin, debidamente indexada con cargo a sus propios recursos, siempre y cuando dentro del período de afiliación se realizaran dichos descuentos, como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1688-2019, postura que comparte la Sala. Adicionalmente, todas las sumas a trasladar por la AFP deberán ser debidamente indexadas.

⁷Respecto de este particular se puede consultar la sentencia SL 2877-2020, providencia en la cual la Corte Suprema de Justicia encontró procedente la devolución de los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, máxime cuando estos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas en una subcuenta separada con el fin de financiar aquellas prestaciones.

Ahora, no se pueden pasar por alto las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia como las sentencias CSJ SL843-2022, CSJ SL755-2022 y CSJ SL756-2022, en las cuales se impone a las AFP privadas la obligación de entregar información en la que aparezcan discriminados los conceptos trasladados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se *adicionará* la condena para ordenar que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes emolumentos a Colpensiones, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Excepción de prescripción

La Corte Suprema de Justicia en sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL373-2021 y CSJ SL4062-2021 ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. Dicha postura la comparte esta Sala por lo que no está llamada a prosperar la excepción en estudio.

Debe dejarse también en claro que los conceptos a devolver por el fondo privado corresponden a sumas que están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de una posible prestación; en consecuencia, están ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, aspecto por el cual tampoco pueden estar sometidos a prescripción, tal y como se señaló en la sentencia CSJ SL1473-2021 de la Alta Corte.

Así las cosas, se *adicionará* y *confirmará* la sentencia revisada en apelación y en grado jurisdiccional de consulta.

Las costas procesales de la primera instancia como allí se dijo. Sin costas en esta instancia por salir avante la apelación de Colpensiones y dado que las demás materias se revisaron en consulta.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

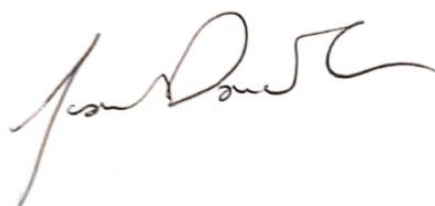
PRIMERO: ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia, en el sentido de ORDENAR a Protección SA que i) traslade a Colpensiones, además de lo ordenado, la prima de reaseguros de Fogafin con cargo a sus propios recursos, por el lapso en que el demandante permaneció allí, siempre y cuando dentro del período de afiliación se hayan realizado estos descuentos. Adicionalmente, todas las sumas objeto de traslado, deberán ser debidamente indexadas, ii) al momento de cumplir la orden de trasladar las sumas recibidas con motivo de la afiliación de la actora, los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

SEGUNDO: Confirmar la sentencia de primer grado en lo demás.

TERCERO: No se imponen costas en esta sede.

La presente providencia se notifica por edicto.

Los magistrados,



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

05001310501420220016401
145-23



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ